

**NUE 83-A-2019 (OC)**

**Somoza Hernández contra Municipalidad de San Salvador**

**Resolución definitiva**

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:** San Salvador, a las ocho horas con veintiocho minutos del ocho de noviembre de dos mil diecinueve.

***Descripción del caso:***

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por **José Salomón Somoza Hernández**, en adelante el apelante, en contra de la resolución emitida por el oficial de información de la **Municipalidad de San Salvador**, que denegó la información relativa a: *"fotocopia del control de usuarios del Katya Miranda correspondiente al 27 de septiembre de 2018"*.

Por su parte, el oficial de información de dicha Municipalidad resolvió lo siguiente: *"confirmar la inexistencia, en esta municipalidad de la información solicitada por el petionario"*.

Al respecto, el apelante manifestó su inconformidad con lo resuelto expresando que: *"de una forma personal se presentó como titular del derecho a instalaciones del dormitorio publico Katya Miranda AMSS y el sr. Iron López, estaba departiendo juegos de azar (naipe) y rompió su solicitud manuscrita, echándola a un bote de basura."*

El Instituto admitió la apelación y designó a la Comisionada Daniella Huezo Santos, y posteriormente, el caso fue reasignado a la Comisionada Olga Noemy Chacón de Hernández para instruir el procedimiento.

Durante la realización de la audiencia de avenimiento, la apoderada de la **Municipalidad de San Salvador**, licenciada Sonia Marjori Portillo de Paredes, solicitó un plazo de quince días hábiles para realizar una nueva búsqueda de la información solicitada por el apelante. Posteriormente, y fuera del plazo establecido, la apoderada de dicha municipalidad remitió escrito en el cual manifestó que le solicitó dicha información al

Gerente de Desarrollo Social, pero no fue remitida a esa subgerencia legal; también, solicitó dicha información al director del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, quien remitió una serie de documentación, la misma que en su oportunidad el oficial de acceso a la información de esa Municipalidad entregó al ahora apelante.

En el informe justificativo de ley, la apoderada de la **Municipalidad de San Salvador**, expresó que el oficial de información declaró la inexistencia de dicha documentación solicitada por el peticionario, ya que lo solicitó a la Gerencia de Desarrollo Social, suscrito por el coordinador de la Unidad Jurídica del CAM, quien manifestó no tener lo requerido. En razón de lo anterior, por medio del informe justificativo, ratifica lo actuado por el oficial de información, declarando la inexistencia de dicha documentación.

La audiencia oral se llevó a cabo en la fecha y hora señalada, con la comparecencia de la apoderada de la **Municipalidad de San Salvador** y el apelante.

#### *Análisis del caso:*

El análisis jurídico del caso seguirá el orden lógico siguiente: (I) principio de máxima publicidad y sus efectos; (II) valoración de la prueba aportada; (III) la información inexistente y sus presupuestos; (IV) análisis del caso en torno a la inexistencia de la información alegada por el ente obligado.

I. El principio de máxima publicidad ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir información, contenido en el artículo 13 de la Convención Americana. En ese sentido, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han establecido que el derecho de acceso a la información debe estar regido por el principio de “máxima divulgación”<sup>1</sup>. Asimismo, el numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08 “principios sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “toda la información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano

---

<sup>1</sup> Corte I.D.H., caso Claude Reyes y otros vs. Chile, sentencia del 19 de septiembre de 2006, serie C, n° 151, párr. 93; Corte I.D.H caso Gomes Lund y otros vs Brasil, sentencia del 24 de noviembre de 2010, serie C n° 219, párr.230.

fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto solo a un régimen limitado de excepciones”<sup>2</sup>.

En ese orden, el artículo 4 letra “a” de la LAIP establece la máxima publicidad como principio rector del acceso a la información pública, el cual demanda que la información en poder de los entes obligados es pública y accesible y sometida a un régimen limitado de excepciones. Entonces, para garantizar dicho principio y el de disponibilidad, la LAIP configuró un procedimiento sencillo y expedito que facilite el acceso de la información pública a toda persona.

Asimismo, la Corte IDH, se ha manifestado sobre el principio de máxima publicidad, en el sentido que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, de manera que toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”<sup>3</sup>.

También, se puede interpretar que los efectos del principio de máxima publicidad frente a la información que produzca, administra o se encuentra en poder de los entes obligados<sup>4</sup>, son que: a) el derecho de acceso es la regla y el secreto es la excepción<sup>5</sup>; b) la carga probatoria para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer al órgano que fue solicitada<sup>6</sup>; y, c) preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas o faltas de regulación<sup>7</sup>.

En relación a las limitaciones al DAIP se ha pronunciado la “Declaración Conjunta de 2004, de los relatores para la libertad de expresión”, en la que se efectuó una formulación sintética de los requisitos que deben cumplir las limitaciones al derecho de acceso a la información: que “el derecho de acceso a la información deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones cuidadosamente adaptado para proteger los intereses públicos y

<sup>2</sup> 7 de agosto de 2008, punto resolutivo 7, disponible en: [http://www.oas.org/cji/CJI\\_RES\\_147\\_LXXIII](http://www.oas.org/cji/CJI_RES_147_LXXIII).

<sup>3</sup> CIDH- caso Gomes Lund y otros vs. Brasil, sentencia del 24 de noviembre de 2010, serie C, n° 219, párrafo 230.

<sup>4</sup> El art. 7 de la LAIP, contiene quienes son los entes obligados a la mencionada ley.

<sup>5</sup> Relatoría especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano”, segunda edición, 2012.

<sup>6</sup> Ídem

<sup>7</sup> Ídem



privados preponderantes, incluida la privacidad”, que “las excepciones se aplicaran solamente cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la información”, y que “la autoridad pública que procure denegar el acceso debe demostrar que la información está amparada por el sistema de excepciones<sup>8</sup>”.

II. La prueba, ha sido definida en jurisprudencia contenciosa administrativa<sup>9</sup>, como “el acto o serie de actos procesales por los que se trata de convencer al juez de la existencia o inexistencia de datos lógicos que han de tenerse en cuenta en el fallo”.

La prueba se encuentra regida por los principios de conducencia, pertinencia y utilidad. Estos principios representan una limitación del principio de libertad de la prueba; sin embargo, son sumamente necesarios, pues ello significa que no se debe focalizar recursos en la práctica o reproducción de medios que por sí mismos o por su contenido, no sirvan en absoluto para los fines propuestos y aparezcan claramente impertinentes.

Los principios expuestos anteriormente se definen de la siguiente manera: a) conducencia: es la idoneidad legal de la prueba para demostrar un hecho determinado, implica una comparación entre el medio probatorio y la ley para definir si con el empleo de esta prueba se puede demostrar el hecho objeto del proceso; b) pertinencia: es la adecuación entre los hechos objeto del proceso y los hechos que son tema de la prueba de éste, o sea, que es la relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema decidendi; y, c) utilidad: significa que el móvil de verterla o verterla en un proceso es el de llevar probanzas que presten algún servicio a la convicción del juez; por ende, si una prueba no lleva a ese propósito debe rechazarla el juzgador<sup>10</sup>.

En este contexto, el Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), de aplicación supletoria en el presente procedimiento conforme con el artículo 102 de la LAIP, contempla

---

<sup>8</sup> Declaración conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y Expresión, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y el Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión (2004). Disponible en: [http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos\\_basicos/declaraciones.asp](http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/declaraciones.asp)

<sup>9</sup> Sentencia definitiva, referencia 331-2010, emitida el 10 de julio de 2017, pronunciada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.

<sup>10</sup> Sentencia definitiva, referencia 304-2013, emitida el 11 de julio de 2018, pronunciada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.

dos extremos que deben cumplirse para la admisión de la prueba presentada por las partes: la pertinencia y la utilidad. En cuanto a la **pertinencia**, el artículo 318 del CPCM, establece que no deberá admitirse ninguna prueba que no guarde relación con el objeto del proceso; por otro lado, en lo relativo a la **utilidad**, el artículo 319 del mismo cuerpo normativo, contempla que no deberá admitirse aquella prueba que según las reglas y criterios razonables, no sea idónea o resulta superflua para comprobar los hechos controvertidos.

Bajo estas consideraciones, el apelante durante el desarrollo del presente procedimiento ofreció como prueba: 1) Resolución de prórroga emitida por el oficial de información de la municipalidad de San Salvador; 2) resolución de admisión emitida por el oficial de información de la municipalidad de San Salvador; 3) resolución final emitida por el oficial de información de la municipalidad de San Salvador; 4) memorando remitido por Carlos Roberto Valencia Funes en calidad de coordinador de la unidad jurídica del CAM, dirigido al oficial de información interino de la municipalidad de San Salvador; 5) nota suscrita por el comandante 2° José Julio Durán Alfaro en calidad de jefe de delegación CAM distrito 1, en fecha 26 de marzo de 2019; 6) nota suscrita por Juan Carlos Montes Arévalo en calidad de Gerente de Desarrollo Social, en fecha 04 de abril de 2019; 7) nota remitida a Margoth Guzmán, en calidad de coordinadora de la FGR, de fecha 22 de marzo de 2019, suscrita por José Salomón Somoza H.; 8) nota dirigida a Ernesto Muyshont en calidad de alcalde municipal de San Salvador, de fecha 21 de marzo de 2019, suscrita por José Salomón Somoza; 9) copia simple de la solicitud de información realizada el 21 de marzo de 2019 a la municipalidad de San Salvador; 10) resolución emitida por Exequiel José Moreno Retana, en calidad de oficial de información de la municipalidad de San Salvador, el quince de marzo de 2019; 11) nota remitida a Margoth Guzmán, en calidad de coordinadora de la FGR, de fecha 19 de marzo de 2019, suscrita por José Salomón Somoza H.; 12) nota remitida a Ernesto Muyshont en calidad de alcalde municipal de San Salvador, de fecha 28 de septiembre de 2019, suscrita por José Salomón Somoza; 13) denuncia interpuesta en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en fecha 28-09-2018 por José Salomón Somoza Hernández; 14) copia simple de siete hojas de listado de asistencia "atención para personas en situación de calle en el albergue municipal y dormitorios públicos de San Salvador; 15) nota dirigida el IAIP, de fecha 05 de junio de 2019, suscrita por José Salomón Somoza H.; 16) nota dirigida a la Alcaldía Municipal de San Salvador, de fecha 30 de mayo de 2019,



suscrita por José Salomón Somoza Hdez; 17) nota dirigida al señor alcalde de la AMSS y al señor director C.A.M.S.S , de fecha 30 de mayo de 2019, suscrita por José S. Somoza H.; 18) copia simple del acta de audiencia de avenimiento celebrada el veintiocho de mayo de 2019 en el Instituto de Acceso a la Información Pública; 19) nota dirigida al Instituto de Acceso a la Información Pública, de fecha 16 de agosto de 2019 suscrita por José Salomón Somoza H.; 20) escrito presentado el 27 de septiembre de 2019, suscrito por José Salomón Somoza H, dirigido a este Instituto.

En razón de lo anterior, se admite como prueba documental debido a que son útiles y pertinentes las descritas en el párrafo anterior, bajo los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14; debido a que con la incorporación de esta documentación se tiene por acreditada la existencia de la solicitud hecha por el ciudadano, el trámite realizado en dicha solicitud; y la existencia del registro que se levanta en el albergue solicitado.

En relación con la prueba expuesta en los numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, este Instituto considera que la documentación ofrecida ha sido dirigida a Instituciones diferentes a este Instituto, en la cual se detallan hechos que en razón de las competencias que tiene este Instituto, no son objeto de conocimiento en el presente procedimiento; y, respecto a la documentación detallada en los numerales 15, 18, 19 y 20 consiste en documentación relacionada a actos que forman parte de las actuaciones realizadas por este Instituto en la tramitación del presente procedimiento; por lo tanto, procede el rechazo de las mismas.

Por otro lado, la **Municipalidad de San Salvador** no adjuntó documentación probatoria por medio de la cual se acredite la inexistencia de la información solicitada.

Durante la realización de la audiencia oral efectuada a las once horas del 04 de septiembre del presente año, este Instituto tomando en cuenta el principio de verdad material reconocido por la Ley de Procedimientos Administrativos en el Art. 3 numeral 8, y por la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, el cual ordena a las autoridades resolver con base a los hechos reales, más allá de que hayan sido alegados y probados por los interesados; implicando que la Administración tiene el derecho y deber de reunir toda la

prueba relativa al conocimiento real de los hechos sobre los cuales se debe resolver<sup>11</sup>; estimó que para resolver el fondo del presente procedimiento era necesario realizar una inspección sobre el libro en el que se registra la asistencia de la “atención para personas en situación de calle en albergue municipal y dormitorios públicos de San Salvador”, a efecto de verificar la presunta imposibilidad de brindar el acceso a la información requerida por el apelante, siendo dicha diligencia pertinente y útil para dicho propósito, para lo cual se delegó a la comisionada instructora del presente procedimiento, para realizar dicha diligencia.

Por medio de la inspección realizada se observó que hay fechas que no se encuentran registradas en dicho libro, y en relación a la fecha correspondiente al 27 de septiembre de dos mil dieciocho no se encuentra archivada en dicho registro; además se hizo constar la falta de registro con fechas 1, 2, 3, 16 y desde el 23 al 27 de septiembre. Asimismo, se apreció que no existe un formato estandarizado, ni tampoco dichas hojas se encontraban foliadas. Advirtiéndose con dicha inspección el descuido en dicho registro.

III. Para el caso en comento, la municipalidad alega que la información solicitada por el ciudadano **Somoza Hernández**, no puede ser entregada en razón de que la misma es inexistente según las respuestas emitidas por el Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y la Gerencia de Desarrollo Social; en razón de que, la unidad de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal no se hizo presente el día 27/09/2018, desconociendo los motivos de la ausencia de dicha unidad para no asistir al Albergue Municipal Katya Miranda.

En relación a lo argumentado por la municipalidad respecto a la ausencia de la unidad de comunicaciones en la fecha solicitada, es necesario acotar que durante la tramitación del presente procedimiento, no se alegó si dentro de las funciones que dicha unidad posee, se encuentra registrar la entrada de las personas a dicho albergue, ya que tanto en el expediente administrativo, como en el informe de ley, solo se establece que dicha unidad no se hizo presente y que en razón de dicha ausencia la información es inexistente; por lo tanto no se brindaron elementos que abonen cual fue la imposibilidad de realizar el registro que diariamente realizan, o si a dicha unidad es la encargada exclusivamente de realizar dicha función.

<sup>11</sup> Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, sentencia 408-2007, del cinco de noviembre de dos mil doce.



La información inexistente se constituye, básicamente, cuando esta no se encuentra en los archivos de la unidad administrativa que debería poseerla –artículo 73 de la LAIP-. No obstante, tal ausencia debe ser corroborada y comprobada por la persona que ejerce las funciones de oficial de información, tomando las medidas pertinentes para localizar lo solicitado; ya que la mera alegación de no localización resulta insuficiente para declarar su inexistencia.

Sobre ello, este Instituto ya ha reconocido como causales que pueden dar lugar a la inexistencia de la información, las cuales son: a) Que nunca se haya generado el documento respectivo; b) que el documento se encuentre en los archivos del ente obligado pero se haya destruido por su antigüedad, fuerza mayor o casi fortuito; y, c) que la información haya estado en los archivos de la dependencia o entidad y la inexistencia se derive de su destrucción. En este caso deberá verificarse si ésta se realizó de conformidad por las disposiciones vigentes en ese momento, o bien, si la destrucción se hizo de manera arbitraria<sup>12</sup>.

En este contexto, corresponde estudiar la primera causal de inexistencia, puesto que sería la más aplicable al caso en razón de las alegaciones hechas por la **Municipalidad de San Salvador**, ya que prácticamente, se está argumentando que la información no ha sido generada.

Es atinente señalar, que la inexistencia implica necesariamente que la información no se encuentre en los archivos de la autoridad, es decir, se trata de una cuestión de hecho; no obstante que la dependencia o autoridad cuente con las facultades para poseer dicha información. En este sentido, es de señalar que la inexistencia es un concepto que se atribuye a la información solicitada<sup>13</sup>.

Además, en resoluciones emitidas por este Instituto<sup>14</sup>, se han tomado como base los **criterios emitidos por la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA)**, y en relación a la inexistencia de la información ha establecido que: “se deberá fundar y motivar que la información solicitada no existe, y para ellos, se tiene que acreditar que se realizó una

---

<sup>12</sup> Resolución definitiva IAIP 39-A-2013, emitida el 28 de octubre de 2013.

<sup>13</sup> Criterio/00015-09; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos de México.

<sup>14</sup> Resolución definitiva IAIP 143-A-2017, emitida el 11 de diciembre de 2017.



búsqueda exhaustiva en los archivos materiales y en su caso, digitales consignando los requisitos que den certeza de que la búsqueda fue realizada de manera minuciosa, tales como: 1) Que se hizo llegar la solicitud de acceso a todas las áreas competentes sobre la información requerida, con el propósito de que en su caso la localizaran y manifestaran si se encontraba disponible; 2) que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información y que estas fueron las adecuadas para atender al caso concreto; 3) que el criterio de búsqueda utilizado fue el adecuado: amplio y extensivo (es decir, no restrictivo); 4) que de la búsqueda efectuada no se localizaron documentos o información que den cuenta de lo solicitado; y, 5) la precisión, en su caso, de que se procedió a la destrucción de la información por cuestiones de la vida útil, en los términos de la ley que se trate. Cuando posterior al análisis de la inexistencia de la información, se determine que la misma debería de existir en virtud de que se deriva del ejercicio de facultades, competencias o atribuciones de la autoridad (ente obligado) ésta deberá generarse o reponerse en los casos que sea posible”.

Bajo esa lógica, la forma idónea para verificar y comprobar que efectivamente no existe en sus registros la información que les fue solicitada, es a través de las diligencias de búsqueda que debió realizar el oficial de información para localizar la información en las unidades administrativas que pudieran tener en su poder tal información.

Así, al verificar minuciosamente el expediente administrativo bajo referencia 124-UAIP-2019, remitido por el oficial de información de la municipalidad, se encuentra que dicho servidor público, únicamente realizó dos gestiones en relación a la búsqueda de la información; la primera, dirigida al director del CAM por medio de memorando ref. 124-UAIP-19, y, la segunda, dirigida al Gerente de Desarrollo Social por medio de memorando ref. 124-UAIP-19.

En razón de lo anterior, se obtuvieron las respuestas siguientes: en relación al primer memorando, suscrito por José Julio Durán Alfaro, se expresó que no tenían la información ya que la Unidad de Comunicaciones de la alcaldía municipal no se hicieron presentes el día 27/08/2018; y solamente se cuenta con las novedades y consignas del CAM. No se cuenta con hojas de control de usuarios ya que no es competencia del CAM; y, en relación con el segundo requerimiento se obtuvo como respuesta que hasta la fecha dicha gerencia desconoce los motivos por los cuales la Unidad de Comunicación no asistió al albergue



municipal Katya Miranda, el día 27 del año 2018, pese a que al final de cada mes se comparte la calendarización del albergue a todas las unidades involucradas.

En relación a lo solicitado por el apelante, este Instituto estima pertinente retomar lo establecido en la jurisprudencia constitucional:

El artículo 70 de la Constitución de la República establece: “el Estado tomará a su cargo a los indigentes que, por su edad o incapacidad física o mental, sean inhábiles para el trabajo”; es decir que, dicha disposición prescribe *la obligación del Estado de brindar protección especial a las personas en situación de indigencia, es decir, que carecen de los recursos necesarios para vivir dignamente, convirtiéndose dicha obligación respecto a sus beneficiarios en el derecho fundamental del adulto mayor o del incapaz indigentes a la protección del Estado*<sup>15</sup>.

En efecto, la protección especial y subsidiaria reconocida a favor de aquellos constituye un derecho a gozar de un resguardo de índole personal y social por parte del Estado. De ahí que el ámbito de protección de este derecho se integre –entre otros– por los siguientes elementos: (i) la prohibición de actos discriminatorios que aislen social y económicamente a los adultos mayores o incapaces en condición de indigencia; (ii) la garantía de su seguridad frente a cualquier tipo de peligro, violencia física y/o maltrato psicológico; (iii) el fomento de actividades ocupacionales acordes a sus condiciones personales que les permitan desarrollar una vida productiva; y (iv) la asistencia de las condiciones materiales necesarias para vivir de forma digna, tales como alimentación, vivienda, servicios de salud, etc.<sup>16</sup> "

En relación a lo anterior, en la resolución emitida por la municipalidad de San Salvador, en fecha 23 de noviembre de 2018, con referencia Ref. 337-UAIP-2018, se establece la existencia del acuerdo 4.4 tomado en sesión ordinaria de fecha 10 de junio, en el cual se retoma las disposiciones establecidas en leyes secundarias como lo son la Ley de Atención Integral Para la Persona Adulto Mayor, Código de Familia, Código Municipal; y

---

<sup>15</sup> Sentencia Definitiva del proceso de amparo de referencia 370-2015, emitida el 22 de diciembre de 2017, pronunciada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

<sup>16</sup> Ídem.

en ese marco, se realizan ciertas valoraciones que motivan la aprobación del proyecto denominado “atención integral para personas en situación de calle en albergue municipal y dormitorios públicos de San Salvador”, el cual sería ejecutado entre diversas unidades, entre ellas, la Dirección de Desarrollo Municipal, Unidad de Gestión de Calidad, Dirección de Desarrollo Municipal, Gerencia Legal, y la Mesa Técnica de Ejecución y Seguimiento de dicho proyecto (CFL, Subgerencia de Participación Ciudadana, Departamento de Promoción para la Salud, Departamento de Protección Civil, Secretaria de Antidrogas de la ciudad de San Salvador, Unidad de Principios y Valores, y el CAM), de lo cual se advierten las diversas unidades vinculadas con dicho proyecto.

De igual manera, dentro del portal de transparencia de la **Municipalidad de San Salvador**, se encuentra establecido: “a través de la Gerencia de Desarrollo Social, se ha hecho la recuperación del Centro de Atención Integral para las personas en situación de la calle albergue Katia Miranda coordinando una serie de reuniones con las áreas involucradas para el buen funcionamiento del Albergue, obteniendo los siguientes resultados: diariamente se registra, se distribuye y se organiza la entrada de las personas a fin de contar con un mejor control de los que se albergan, lo cual permite brindarles una mejor atención y de manera oportuna<sup>17</sup>”

Con lo anterior, se puede concluir que la existencia de albergues para las personas de escasos recursos se encuentra amparadas en disposiciones constitucionales con las que se busca salvaguardar no solo la integridad física del ser humano, sino que, la dignidad que toda persona posee, independientemente de su situación económica; para lo cual es necesario que el Estado establezca la forma y los mecanismos de organización y control necesarios para asegurar una protección especial y subsidiaria a este grupo vulnerable.

En definitiva, lo expuesto por la **Municipalidad de San Salvador** respecto a la inexistencia de la información solicitada, debió haberse fundamentado y/o acreditado; lo cual, conlleva una función informativa, consistente en trasladar al solicitante las razones por las cuales no se cuenta con información que ha sido requerida en días anteriores y en días previos a la fecha solicitada; puesto que como se ha expuesto anteriormente no basta alegar

<sup>17</sup> <http://www.sansalvador.gob.sv/CentroAtencionintegral>, consultado el 10 de octubre de 2019.  
Página 11 de 14



la inexistencia de la información solicitada; sino que en el presente caso, se ha comprobado la existencia de dichos registros de ingreso al lugar, por lo tanto, al no entregar el registro en la fecha solicitada, debe de fundamentarse las razones por las cuales dicha información no se encuentra disponible, y acreditar que se realizaron las gestiones necesarias para su localización.

Con lo expuesto en párrafos anteriores, este Instituto advierte que la inexistencia alegada por la municipalidad se fundamenta en que la información solicitada no ha sido encontrada, pero únicamente en los archivos de la Gerencia de Desarrollo Social, debido a que dicha unidad es la encargada de llevar el control de las personas que ingresan a dicho albergue, según lo establecido en el expediente administrativo y lo expuesto en su página institucional; y en segundo lugar, se advierte que dicha municipalidad no acreditó si una de las funciones de la Unidad de Comunicaciones de la Municipalidad es la de realizar los registros día a día para que las personas puedan ingresar al albergue Katia Miranda. En consecuencia, es pertinente ordenar que se realice una nueva búsqueda que no solamente se limite a la unidad que formalmente es la encargada, ya que como se demostró en párrafos anteriores que concurren diversas unidades para el funcionamiento de dicho lugar; y en caso que lo requerido no sea encontrado, deberá entregarse al apelante todas las diligencias de búsqueda que se realizaron y la razón por la cual dicha información no se encuentra resguardada en los registros; es decir, los motivos que fundamentan que la unidad correspondiente no levantara el registro de las personas que ingresaron al albergue en la fecha solicitada.

Para finalizar, este Instituto advierte que en los escritos presentados por **José Salomón Somoza Hernández**, dicho ciudadano argumenta la existencia de trato cruel e inhumano con degradación, víctima de tortura psicológica, discriminación por parte de personal perteneciente a cuerpos de seguridad del CAM; asimismo, durante el desarrollo de la audiencia oral, manifestó que cuando él se presentó a la Gerencia de Desarrollo Social se le pidió que desalojara el dormitorio y que nunca más se volviera a apersonar ahí, discriminándolo totalmente por el hecho de haberlos denunciado; por lo que, con la finalidad de verificar la posible existencia de vulneraciones a derechos humanos este Instituto considera oportuno remitir una copia certificada del presente expediente a la Procuraduría

para la Defensa de los Derechos Humanos, para realizar las gestiones correspondientes en razón de lo alegado por el ciudadano Somoza Hernández.

***Decisión del caso:***

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con base en los artículos 94, 96 letra “d” y 102 de la LAIP, este Instituto resuelve:

**a) Revocar** la resolución emitida por el oficial de información de la **Municipalidad de San Salvador**.

**b) Ordenar** al titular de la **Municipalidad de San Salvador**, que en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de esta resolución, realicen lo siguiente: una nueva búsqueda que no solamente se limite a la unidad que formalmente es la encargada; y, en caso que lo requerido no sea encontrado, deberá entregarse al apelante todas las diligencias de búsqueda que se realizaron y la razón por la cual dicha información no se encuentra resguardada en los registros; es decir, los motivos que fundamentan que la unidad correspondiente no levantara el registro de las personas que ingresaron al albergue en la fecha solicitada.

**c) Ordenar** a la **Municipalidad de San Salvador** que en el plazo de tres días hábiles vencido el término anterior, a través de su oficial de información, entregue a **José Salomón Somoza Hernández**, lo solicitado, según los parámetros establecidos en el literal b) de la parte resolutive de la presente resolución.

**d) Requerir** al titular de la **Municipalidad de San Salvador** que, en el plazo de veinticuatro horas, luego de fenecido el plazo estipulado en la letra c) de esta parte resolutive, remita a este Instituto el informe de cumplimiento de la presente resolución. Este informe también podrá ser remitido vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**

**e) Remitir** el presente expediente a la **Unidad de Cumplimiento** de este Instituto para que verifique la ejecución de esta resolución.

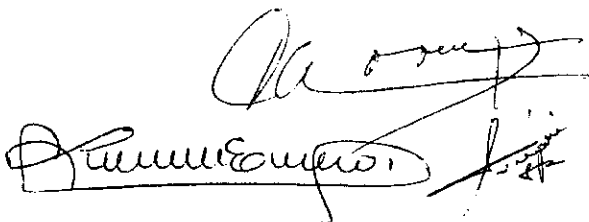
f) **Entregar a José Salomón Somoza Hernández** copia del video de la audiencia oral correspondiente al presente procedimiento.

g) **Hacer** saber a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, de conformidad con el artículo 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, si así se considerase necesario.

h) **Publíquese** esta resolución oportunamente.

i) **Remitir** copia certificada del presente expediente a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para verificar la posible existencia de vulneraciones a derechos humanos y realizar las gestiones correspondientes.

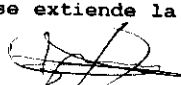
j) **Notifíquese.**



**PRONUNCIADA POR LA COMISIONADA Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN.**

XT/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los doce días del mes de noviembre de dos mil diecinueve.

  
José Augusto Hernández Funes  
NOTIFICADOR  
IAIP

Página 14 de 14

